

Concepción, diez de mayo de dos mil veintidós.

Visto, oído y teniendo presente.

Primero. Demanda. Que, comparecen ante este tribunal doña CRISTINA VERA FUENTES y don LEONARDO GODOY ACOSTA, abogados, domiciliados en Barros Arana 790, of. 303, Concepción y O'Higgins 1186, of. 713, Concepción, respectivamente, en representación procesal de don ÁLVARO HERNÁN SOLÍS PINO, abogado, domiciliado en Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1265, depto. 20, Concepción, quienes vienen en deducir demanda de despido indirecto, nulidad de despido y cobro de prestaciones laborales en procedimiento de aplicación general, en contra de la ex empleadora de su mandante, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA SAN PEDRO S.A, representada para estos efectos de conformidad al artículo 4º del Código del Trabajo por don Marcelo Mendoza Astudillo, ignoran profesión u oficio, ambos domiciliados en Av. Central esq. Las 2 Torres S/N, Candelaria, San Pedro de la Paz y Galvarino 540, San Pedro de la Paz o quien lo subrogue o represente en virtud de dicho artículo, solicitando declarar:

1º Que se acoge la demanda de despido indirecto por haber incurrido el empleador en incumplimiento grave a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo;

2º Que la demandada debe pagar al demandante las siguientes prestaciones:

a) La suma de \$421.250.- por concepto de indemnización sustitutiva por falta de aviso previo, sin perjuicio de estimar una cifra distinta, incluso mayor.

b) La suma de \$4.633.750 por concepto de indemnización por años de servicio, sin perjuicio de estimar una suma distinta, incluso superior;

c) La suma de \$2.316.875 por incremento de la indemnización por años de servicio o una cantidad diferente, aún superior;

d) La suma de \$4.687.600 por remuneraciones adeudadas desde el mes de marzo de 2020, o la suma que se estime pertinente fijar, incluso mayor, conforme al mérito del proceso;



e) La suma de \$5.063.274 por concepto de feriado legal y proporcional, sin perjuicio de estimar una suma diferente;

f) La suma \$15.910.889.- por concepto de gratificaciones adeudadas, o la suma que se estime pertinente fijar, incluso mayor, conforme al mérito del proceso;

3° Que el despido es nulo, por lo que la demandada deberá pagar las remuneraciones del demandante por el periodo que medie entre la desvinculación y se comunique el pago íntegro de las cotizaciones de seguridad social, adjuntando las respectivas planillas de pago, sobre una remuneración imponible de \$421.500.- o aquella que se determine;

4° Que la demandada deberá pagar las cotizaciones derivadas de las gratificaciones no pagadas al trabajador por toda la relación laboral, así como las cotizaciones de los meses de julio de 2001, abril 2002, enero y julio de 2003, octubre y diciembre de 2004, diciembre de 2005, agosto de 2006, agosto de 2015, agosto, septiembre y noviembre de 2017, diferencias de los meses de marzo de 2020 y desde junio de 2020 a mayo de 2021 en el Instituto de Previsión Social, como continuador de la Ex Caja EMPART y en FONASA por los meses de julio de 2001, abril de 2002, diciembre de 2009 a enero de 2020, y las diferencias de los meses de abril, junio a diciembre de 2020 y de enero a mayo de 2021.

5° Que la demandada deberá pagar los reajustes e intereses de cada partida demandada conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, hasta la fecha efectiva del pago, y

6° Que se condena a la demandada al pago de las costas de la causa.

Segundo. Contestación. Que, comparece también ante este juzgado don MARCELO ANDRÉS MENDOZA ASTUDILLO, empresario, en representación legal de la demandada, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA SAN PEDRO S.A., Sociedad del giro de su denominación, ambos con domicilio en Avenida Central esquina Las Torres Sin número, Candelaria, San Pedro de la paz, quien expone:



“Que el artículo 171 del Código del Trabajo señala en su inciso primero que (...) el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de sesenta días hábiles, contado desde la terminación” (...).

Queda de manifiesto que existe un período muy superior al de 60 días hábiles que contempla el Código del Trabajo para la interposición de la demanda intentada por la contraria, por lo que esta debe ser rechazada por extemporaneidad.

Que, en subsidio de lo anterior, estando dentro del plazo legal y en la representación que invisto, vengo en contestar la demanda de autos, solicitando desde luego su rechazo, con expresa condena en costas, sobre la base de las consideraciones de hecho y de derecho que expone.

“Es efectivo que existió una relación de trabajo que unió a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA SAN PEDRO S.A. con el actor de autos, la que inició con fecha 01 de enero del 2001 y terminó, según los dichos del trabajador, mediante la renuncia del trabajador el 24 de mayo del presente año.

El trabajador expresa que se cumplió con lo señalado en los artículos 171 y 162 para proceder al despido indirecto, sin embargo, hasta la fecha, no hemos recibido ninguna carta que de aviso del mencionado término de la relación laboral.

Además de lo anterior, los hechos mencionados en la supuesta carta como vulneratorios de los derechos del trabajador son totalmente falsos” (Sic), controvirtiendo, por ende, aquellos hechos no reconocidos expresamente, solicitando, en definitiva, el rechazo de la demanda, con costas.

Tercero. Auto de prueba.

1.- Fecha de término de la relación laboral habida entre las partes.
Circunstancias de dicho término.

2.- Efectividad de haberse despedido el trabajador cumpliendo con las formalidades legales que el legislador ha establecido. En la afirmativa, efectividad de los hechos que imputa en su carta al empleador y circunstancias que configuran la causal invocada.



3.- Efectividad de adeudarse al actor las prestaciones laborales que reclama, naturaleza y monto de las mismas.

4.- Estado de pago de las cotizaciones previsionales del actor a la época del término de la relación laboral habida entre las partes.

Cuarto. Prueba demandante.

I.- Documental.

1.- Copia del contrato de trabajo del demandante, de fecha 1 de enero de 2001.

2.- Copia anexo de contrato, de fecha 1 de marzo de 2019.

3.- Copia carta aviso de comunicación despido indirecto, dirigida al empleador de fecha 24 de mayo de 2021.

4.- Copia comprobantes de despacho de las referidas cartas certificadas, vía Correos de Chile, de fecha 26 de mayo de 2021, Códigos de envío 1176309757101 y 1176309757095.

5.- Constancia seguimiento del envío 1176309757095, obtenido desde la página web de Correos de Chile y dando cuenta de la entrega con fecha 7 de junio de 2021.

6.- Copia sobre de carta devuelta por Correos de Chile, código de envío 1176309757101.-

7.- Copia sobre de carta reenviada al empleador, dirección Av. Central esquina Las Torres s/n, Candelaria, código de envío 1176318404041, con constancia devolución “rehusada”.

8.- Copia carta aviso de comunicación despido indirecto, dirigida a la Inspección del Trabajo, de fecha 24 de mayo de 2021;

9.- Copia comprobantes de despacho de las cartas certificadas referidas los números 7 y 8 precedentes, vía Correos de Chile;

10.- Copia comprobante de vacaciones del actor, de fecha 31 diciembre de 2001;

11.- Copia liquidación de remuneración del actor, mes de febrero de 2020.



12.- Copia de certificado de cotizaciones previsionales del actor, emitido por Instituto de Previsión Social, asociadas a la Ex Caja EMPART (Caja Empleados Particulares), de fecha 29 de junio de 2021;

13.- Copia de certificado de cotizaciones previsionales del actor, emitido por Instituto de Previsión Social, asociadas a la Ex Caja CANAEMPU (Caja Nacional de Empleados Públicos), de fecha 29 de junio de 2021;

14.- Copia de certificado de cotizaciones previsionales del actor en FONASA, periodo enero 2001 a diciembre de 2009, emitido con fecha 5 de agosto de 2021;

15.- Copia de certificado de cotizaciones previsionales del actor en FONASA, periodo enero 2011 a agosto de 2021, emitido con fecha 20 de agosto de 2021;

16.- Impresión pantalla obtenida desde la página del Servicio de Impuestos Internos respecto a la situación tributaria de la empresa demandada.

II.- Percepción documental. Respecto a la impresión de pantalla obtenida desde la página del Servicio de Impuestos Internos singularizada como documento N° 16 y para la constancia de seguimiento del envío 1176309757095, obtenido desde la página web de Correos de Chile, singularizado como documento N°5.

III.- Exhibición de documentos.

Solicita se exhiba por la demandada los siguientes documentos.

1.- Copia de los balances comerciales años comerciales 2001 a 2020;

2.- Copia de declaración de impuesto a la renta, años comerciales 2001 a 2020.

Todo lo anterior bajo el apercibimiento legal, esto es, para el caso que se omita la exhibición de los documentos ordenada, se estimen probadas las alegaciones que su parte realizó en cuanto a la existencia de utilidades y la obligación de pagar gratificación.

La parte demandante señala que los documentos a exhibir, respecto a las copias de balance, solo están digitalizados desde el 2017 al 2021, y respecto de



las copias de declaración de impuesto a la renta están digitalizados desde el 2017 al 2020.

La parte demandante da por parcialmente exhibida la documentación y por la restante pide que se haga efectivo el apercibimiento legal que se solicitó.

Que, tratándose de documentación que legalmente debe obrar en poder de la parte demandada, tributaria, comercial y laboralmente, como bien señaló la demandante al momento de observar la prueba, al no haberse exhibido sin causa justificada, la hace incurrir en el apercibimiento contemplado por el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, dándose por probadas las alegaciones del actor en relación a la existencia de utilidades y la obligación de pagar gratificación.

IV.- Oficios. Se incorporan mediante su lectura las respuestas a los oficios despachados por el tribunal y emanados del Instituto de Previsión Social, del Fondo Nacional de Salud y del Servicio de Impuestos Internos.

Quinto. Prueba demandada.

I.- Documental.

1. Anexo de contrato entre las partes de fecha 1 de marzo 2019.
2. Liquidaciones de sueldo firmadas por el demandante desde enero de 2013 a febrero de 2020.
3. Certificado de cotizaciones previsionales otorgado por la empresa Previred, que comprende los períodos de enero de 2018 a septiembre de 2021.
4. Correo electrónico de fecha 3 de junio de 2020 enviado desde la casilla de correo ullmann.essmann.asociados@gmail.com a la casilla karinaao@hotmail.com, con documento adjunto.
5. Comprobante de feriado anual correspondiente al período de vacaciones del año 2018, firmado por el demandante.
6. Comprobante de feriado anual correspondiente al período de vacaciones del año 2019, firmado por el demandante.
7. Contrato de trabajo Juan Carlos Muñoz de 1 de diciembre del 2014.
8. Contrato de trabajo Claudio Gutiérrez de 1 de diciembre del 2014.
9. Contrato de trabajo Héctor Toledo de 1 de diciembre del 2014.



10. Contrato de trabajo Marcos Morales de 1 de diciembre del 2014.
11. Contrato de trabajo Evelyn Avello de 2 de diciembre del 2014.
12. Contrato de trabajo Enrique Maragaño de 2 de marzo del 2015.
13. Contrato de trabajo Roberto Sepúlveda de 1 de diciembre del 2014.
14. Contrato de trabajo Sergio Ruiz de 1 de diciembre del 2014.
15. Contrato de trabajo Roberto Villar de 1 de diciembre del 2014.
16. Contrato de trabajo Cristian Soto de 1 de diciembre del 2014.
17. Contrato de trabajo José Morales de 1 de diciembre del 2014.
18. Contrato de trabajo Gerardo Fidelis de 1 de marzo del 2015.
19. Contrato de trabajo Roberto Cárcamo de 1 de julio del 2017.
20. Balance general de la Empresa Comercializadora y Servicios de Locomoción Colectiva San Pedro S.A., correspondiente a los periodos anuales de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2016.
21. Cupón de pago deuda previsional folio 97885699-3 de fecha 25/01/2022 con anexo de detalle de períodos pagados. (Prueba nueva).
22. Comprobante de transferencia desde cuenta Rut 0010719212 del Banco Estado a cuenta corriente número 4145605 por un total de \$599.460.- (Prueba nueva).

II.- Confesional. Absuelve posiciones el demandante don Álvaro Hernán Solís Pino, RUT N° 3.996.492-9.

III.- Testimonial. Declara en juicio la testigo doña Evelyn Karina Avello Olivares, RUT N° 13.133.344-7.

Sexto. Caducidad. Que, en la audiencia preparatoria, el tribunal rechazó la excepción de caducidad opuesta por la demandada, sin costas.

Séptimo. Hechos acreditados.

Que, las siguientes circunstancias fácticas no se encuentran controvertidas por las partes, por ende, en su mérito se tienen por acreditados:

1.- Existencia de la relación laboral entre las partes, la que se inició con fecha 01 de enero de 2001.



2.- Remuneración del trabajador, conforme a contrato de trabajo y liquidación de remuneración de febrero de 2020, es de \$301.000.- (sin perjuicio de la discusión de fondo sobre incluir monto por gratificación).

4.- Funciones que desarrollaba el trabajador para la demandada, eran las de asesor jurídico, en su calidad de abogado.

Octavo. Fecha de término de la relación laboral. Que, con fecha 26 de mayo de 2021, por carta certificada vía Correos de Chile, el demandante remitió carta de aviso conforme lo previene el artículo 171 del Código del Trabajo, poniendo término a su contrato de trabajo a contar del día 24 de mayo de 2021, invocando como causal de término de la relación laboral aquella contemplada en el artículo 160 N° 7 del referido Código, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.

Que, de los comprobantes acompañados a estos autos y de la percepción documental realizada, es posible establecer que la carta se remitió al domicilio de la empresa demandada, que se indica en el contrato de trabajo, esto es, Avenida Central, esquina Las Torres S/N, San Pedro de la Paz, como también se envió a calle Galvarino 540, San Pedro de la Paz.

Que, en conclusión cabe asentar que el trabajador cumplió con las formalidades del despido indirecto, siendo la fecha de término de la relación contractual el día 24 de mayo de 2021.

Noveno. Contenido de la carta de auto despido.

Que, en lo pertinente, la misiva incorporada al juicio señala: “(...) Los hechos que configuran la causal invocada, son los siguientes:

- 1.- No pago de remuneraciones por la empresa desde el mes de marzo de 2020.
- 2.- No pago de gratificaciones durante toda la relación laboral.
- 3.- No pago de cotizaciones previsionales derivadas de las referidas gratificaciones, así como cotizaciones declaradas y pagadas por una base inferior a la que corresponde.
- 4.- No otorgar vacaciones anuales por, al menos, 18 periodos” (Sic).



Décimo. No pago de remuneraciones. Que, en cuanto a las remuneraciones del actor reclamadas como no pagadas, cabe señalar que así se ha reconocido por la demandada al contestar la demanda, justificándolo en el estado de excepción constitucional y en la aplicación de la ley 21.227.

Que, lo anterior se reafirma de la prueba confesional y testimonial rendida en autos; acompañándose por otro lado liquidaciones de sueldo hasta febrero de 2020.

Que, la empresa reconoce al contestar la demanda que se acogió a la ley de protección del empleo por acto de autoridad, y suspendió el contrato de sus trabajadores una vez que entró en vigencia la ley N° 21.227 (6 abril 2020).

Que, en este escenario no existe controversia que el actor no se encontraba afiliado al seguro de cesantía, tanto así que la propia demandada reconoce que la solicitud ingresada respecto del demandante fue rechazada por el organismo de seguridad social. Por ende, la empresa no podía suspender el contrato de trabajo de todos sus trabajadores sino sólo respecto de aquellos a quienes les es aplicable la ley N° 21.227, conforme a su artículo 1.

Que, en efecto dicha norma dispone en lo pertinente que “En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Título, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes (...).

Que, así no podía legalmente el empleador suspender el contrato de trabajo del actor ya que éste no es sujeto al que le pueda ser aplicable la normativa contenida en la ley en cuestión, N° 21.227; debiendo en su caso, el empleador, haber procedido de común acuerdo con el trabajador, a pactar una suspensión



temporal de su contrato, con goce de remuneraciones, u otra alternativa que respetara sus derechos laborales, los cuales son irrenunciables, no siéndole aplicable a ella la ley 21.227, ya mencionada.

Qué, entonces existe infracción al contrato de trabajo al haber suspendido el empleador unilateralmente el contrato de trabajo del actor amparándose en una ley que abiertamente sabía no era aplicable al demandante, así lo señala expresamente en su contestación de la demanda (“(...) sin embargo, en el caso del actor de autos, éste no se encontraba afiliado al Seguro de cesantía (...))”, con el agravamiento de no haber pagado su remuneración durante 14 meses y 24 días.

Undécimo. Gratificaciones. Que, conforme a contrato de trabajo las partes no pactaron gratificaciones. Sin embargo la gratificación es parte de las remuneraciones que el empleador debe pagar a su trabajador, y no habiendo aquél optado por la fórmula dispuesta por el artículo 50 del Código del Trabajo, debía proceder anualmente a la liquidación a que obligan los artículos 47 a 49 del mismo cuerpo legal, lo que no hizo, y tampoco cumplió con la obligación de exhibir toda la documentación legal decretada.

Que, en este escenario cabe concluir que el empleador no ha pagado de manera íntegra y oportuna las remuneraciones del trabajador, por lo tanto, ha incumplido una de las principales obligaciones que impone el contrato para el empleador, faculta al trabajador/a para poner término al contrato.

Duodécimo. Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Que, el contrato de trabajo es un contrato que obliga tanto al trabajador como al empleador. El primero se obliga a prestar un servicio determinado, siendo esta su principal obligación, y el segundo a pagar por dicho servicio una remuneración determinada. Dado esto, la circunstancia que el empleador no pague al trabajador la remuneración convenida en el contrato de trabajo constituye un incumplimiento que reviste gravedad y autorizaría al autodespido pues al no pagar las remuneraciones el empleador incumple una de sus principales obligaciones establecidas en el contrato de trabajo, siendo irrelevante para el caso



en cuestión que el empleador haya suspendido –unilateralmente- el contrato de trabajo del actor, pues ya ha quedado establecido que respecto de éste no podía, ampararse en la ley 21.227.-

Que, pese a que no se indica en forma expresa por la demandada, debe dejarse establecido el estado de excepción constitucional que rigió en nuestro país, no constituye un caso fortuito a su respecto, porque como ya se dijo, al actor no le es aplicable la normativa en cuestión, y bien pudo pactar con él un permiso con o sin goce de remuneraciones, un porcentaje de éstas, u otra alterativa que le permitiera respetar los derechos laborales irrenunciables del trabajadora.

Que, así la obligación de remunerar es de aquellas esenciales del contrato de trabajo no sólo por ser uno de los requisitos exigidos en el artículo 7º del Código del Trabajo, sino también por el carácter alimenticio que ella representa para el trabajador.

Que, como puede verse, aparece de manera clara, para esta sentenciadora, que el empleador incumplió gravemente las obligaciones que impone el contrato de trabajo, correspondiendo acoger la demanda de despido indirecto, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva.

Que, la base de cálculo para el pago de indemnizaciones, es aquella propuesta por la demandante, ascendente a la suma de \$421.250.-, no obstante que en anexo de contrato de trabajo se haya consignado como remuneración la de \$301.000.-, la cual también se consigna en la liquidación de sueldo de febrero de 2020, dado lo razonado sobre el pago de gratificación legal adeudada, más cuando el propio artículo 48 del Código del Trabajo dispone que “los empleadores estarán obligados a pagar las gratificaciones al personal con el carácter de anticipo sobre la base del balance o liquidación presentada al Servicio de Impuestos Internos, en tanto se practica la liquidación definitiva” (sic); así habiéndose dado por probado el monto adeudado por gratificación legal, cabe también tener por acreditado el porcentaje que gratifica la remuneración del trabajador para efectos indemnizatorios.



Que, los incumplimientos relativos al no pago de cotizaciones previsionales y no otorgamiento de feriado serán abordados en materia de prestaciones, pues se estima innecesario analizarlos, además, en este acápite pues el incumplimiento grave de obligaciones contractuales de parte del empleador ha quedado acreditado.

Décimo tercero. Prestaciones laborales.

1.- Gratificaciones. Que, conforme lo razonado en el considerando undécimo, como así también conforme al apercibimiento legal contemplado en el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo, hecho efectivo respecto de la demandada, cabe acoger la demanda en este punto condenando a la demandada al pago de las cantidades que se dirán (prescripción), considerando también que de acuerdo al sistema de gratificación por el cual optó la empleadora, correspondía que aportara los antecedentes que se le requirieron por parte del Servicio de impuestos internos lo cual no hizo, en ninguno de los periodos por los cuales se mantuvo vigente la relación laboral, incumpliendo también con la exhibición íntegra de la documental ordenada, no siendo bastante los instrumentos acompañados, los que si bien dan cuenta de la determinación del impuesto a la renta, no permiten aplicar el procedimiento dispuesto por la ley para determinar la gratificación del trabajador, el cual, debe realizarse por el Servicio de impuestos internos, ello sin perjuicio de usarse la vía del apercibimiento legal respectivo para tener por acreditada la deuda.

Que, ahora bien, no obstante lo indicado, antes de determinar el monto al que será condenada la demandada, cabe acoger la excepción de prescripción opuesta por aquella, fundada en lo dispuesto por el artículo 510 del Código laboral, declarándose prescrita la acción para el cobro de gratificaciones anteriores a dos años contados hacia atrás desde la interposición de la demanda.

Que, en cuanto al monto en concreto, reclama el trabajador la suma de \$15.910.889.- el cual se ha dado por acreditado en base al apercibimiento legal contenido en el artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo. No obstante se condenará a la demandada al pago de los últimos dos años de gratificaciones



adeudadas, por la suma de \$3.182.177.-, efectuando un cálculo proporcional del monto reconocido.

2.- Feriado. Que, el actor reclama que no se le ha otorgado feriado durante 18 periodos. Pues bien, en lo que concierne a esta alegación el demandado opuso excepción de prescripción afincada en lo dispuesto por el artículo 510 del Código del ramo, correspondiendo entonces declarar prescrita la acción para el cobro de feriado anterior a dos años contados hacia atrás desde la interposición de la demanda.

Que, aclarado lo anterior en relación al feriado demandado fluye de los antecedentes probatorios aportados por las partes específicamente comprobantes de feriado años 2018 y 20019, que se le adeuda al trabajador feriado legal correspondiente al año 2020 y feriado proporcional, condenándose en consecuencia, a la demandada por estos conceptos en la forma que se dirá en lo resolutive de este fallo.

3.- Remuneraciones. Que, conforme a lo razonado en el considerando décimo de este fallo, cabe acoger la demanda en este extremo, sobre la base de cálculo de \$301.000.- descontando el pago de gratificación, la que será ordenada pagar en el acápite respectivo (a efectos de no generar un doble pago).

Décimo cuarto. Nulidad del despido y cotizaciones adeudadas.

Que, de los certificados de cotizaciones previsionales allegados al juicio, es posible concluir que a la fecha del despido no se encontraban totalmente enteradas las cotizaciones del actor en las entidades previsionales respectivas. En efecto, aquellas de noviembre de 2017 no se hallaban pagadas en IPS, como tampoco las cotizaciones de salud, desde enero de 2012 a enero de 2020 y enero de 2022.

Que, refuerza lo anterior la prueba rendida por el demandado que da cuenta de pagos efectuados con posterioridad al auto despido del actor en las entidades previsionales de que dan cuenta los comprobantes de pago y transferencia aportados a este juicio.



Que, en relación a este último punto, cabe mencionar que no existe prueba en el juicio que dé cuenta de la notificación por correo certificado al actor informando el pago de cotizaciones previsionales adeudadas.

Que, ahora bien, en cuanto al no pago de cotizaciones previsionales derivadas de la gratificación adeudada, esta sentenciadora estima no genera la sanción que dispone el artículo 162 del Código del Trabajo, lo que no tiene mayor relevancia en este proceso dado que procede dicha sanción dado el no pago íntegro de las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador que fueron retenidas por su empleador y no enteradas oportunamente.

Que, así las cosas la acción de nulidad del despido indirecto debe ser acogida según se dirá en definitiva.

Que, sin embargo, respecto del cobro de cotizaciones previsionales, la demanda es rechazada toda vez que la acción corresponde a las entidades previsionales respectivas, y tratándose de una relación laboral formalizada no se requiere declaración previa del juzgado del trabajo.

Décimo quinto. Otras probanzas. Que, la prueba no detallada pormenorizadamente, valorada, en nada altera lo concluido.

Décimo sexto. Costas. Que, la demandada no ha sido totalmente vencida razón por la cual, no se la condena en costas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto además lo dispuesto en los artículos 453 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que, se acoge la acción de prescripción respecto de feriado legal y gratificaciones opuestas por la demandada, en los términos referidos en el considerando décimo tercero de este fallo.

II.- Que, se acoge la demanda de despido indirecto, nulidad del despido y cobro de prestaciones, entablada por don ÁLVARO HERNÁN SOLÍS PINO, abogado, en contra de COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA SAN PEDRO S.A, ambos individualizados, sólo en cuanto, se declara que el empleador incumplió gravemente las obligaciones que impone el contrato de trabajo, ajustándose a derecho el despido indirecto ejercido por el



trabajador, y siendo nulo dicho despido, se la condena al pago de las siguientes prestaciones:

a) La suma de \$421.250.- por concepto de indemnización sustitutiva por falta de aviso previo.

b) La suma de \$4.633.750.- por concepto de indemnización por años de servicio.

c) La suma de \$2.316.875 por concepto de recargo legal del 50% sobre la indemnización por años de servicio.

d) La suma de \$4.454.800.- por concepto de remuneraciones adeudadas desde el mes de marzo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2021.

e) La suma de \$309.100.-, por concepto de feriado legal año 2020 (15 días hábiles y 7 días inhábiles).

f) La suma de \$112.400.-, por concepto de feriado proporcional año 2021 (6 días hábiles más 2 días inhábiles).

g) La suma de \$3.182.177.- por concepto de gratificaciones adeudadas al actor.

III.-Que, las sumas ordenadas pagar lo serán con intereses y reajustes previstos por los artículos 63 y 173 ambos del Código del Trabajo, según corresponda.

IV.- Las remuneraciones que se devenguen entre la fecha del despido indirecto y su convalidación en los términos que indica el artículo 162 del Código del Trabajo, a razón de \$421.500.-.

V.- Que, se rechaza en lo demás la demanda entablada.

VI.- Que, cada parte pagará sus costas.

Regístrese y archívese.

Notifíquese a las partes por correo electrónico, si estuviesen registrados.

RIT O-936-2021

RUC 21- 4-0353578-5



**Dictada por VALERIA AMPARO GARRIDO CABRERA, Jueza Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YRLVZXXSPQ